



## Presos en el limbo 59 colombianos por un capricho presidencial

### Descripción

**Fotografías por:** FABIOLA FERRERO

Hace días que Marlon Fuentes, un colombiano detenido en Caracas en 2016, siente curiosidad por ojear la novela *El Proceso*, el clásico de Franz Kafka. Le han dicho que su historia y la de los 57 hombres y una mujer que le acompañan son parecidas a la de Josef K, el personaje principal. Encerrados en la comisaría de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en La Yaguara, en la capital venezolana, no saben de qué se le acusa y a pesar de tener una orden de liberación –emitida en noviembre de 2017– siguen arrestados.

Todos son colombianos indocumentados en Venezuela y fueron detenidos después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara la captura de un grupo de paramilitares que habrían acampado a 500 metros del Palacio de Miraflores para intentar contra el Gobierno de Venezuela. Fue en vísperas de la movilización opositora bautizada como La Toma de Caracas, el 1 de septiembre de 2016, cuando el mandatario anunció la proeza.

“Están los vídeos. Le he dicho al ministro (para la Comunicación e Información) Luis José Marcano, que preparemos una recopilación de lo que dijeron y de lo hicieron, para que ustedes vean que amenazaron que iba asaltar Caracas, que iban por mí a Miraflores y que el 1° de septiembre se acababa todo, pero no, no se ha acabado nada, ha empezado algo nuevo, la contraofensiva popular revolucionaria de calle”, aseguró el mandatario venezolano.

El fin de aquella “conspiración” solo contó con el megáfono presidencial.

Pero no hubo nombres ni testimonios, mucho menos confesiones. Ni entonces, ni nunca. Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mostró un fúsil con mira telescópica y otras armas de fuego, mapas con rutas imaginarias y fotos de dos campamentos vacíos, desmantelados. En uno de estos, localizado en la zona caraqueña de Manicomio, supuestamente fueron atrapados los 92 “mercenarios” que intentarían contra el Gobierno. Tampoco hubo alguna imagen de aquella captura

colectiva, el fin de aquella “conspiración” solo contó con el megáfono presidencial.

Los testimonios de estos colombianos aclaran que fueron arrestados entre finales de agosto e inicios de septiembre de 2016, no en un solo operativo cerca del palacio de gobierno -como dijo la versión oficial- sino en unas redadas dispersas en varios puntos de Caracas en las que se les retuvo por no contar con los papeles de migración en regla.





[Los 59 detenidos que conviven en el galpón de la Policía Nacional Bolivariana de La Yaguara han colgado sábanas, trapos y bolsas plásticas de sus camas para tratar de establecer un espacio individual. La cárcel es un lugar sin intimidad.](#)

Primero fueron recluidos en la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB (Caracas), luego trasladados a la sede del mismo cuerpo policial en el estado de Táchira (en los Andes venezolanos), desde donde serían deportados a Colombia por indocumentados, pero los regresaron sin mayor explicación a la antigua Escuela Vial de la Policía Nacional en La Yaguara, en Caracas. O mejor dicho, el limbo. Poco a poco se fueron enterando que su encierro era por formar parte de una conspiración contra el gobierno.

Hasta estas detenciones, Maduro había denunciado 21 planes de derrocamiento desde que asumió la Presidencia en 2013. Al momento en que el mandatario anunció la frustración del supuesto plan, Fuentes –nacido en 1982, en Barranquilla– llevaba siete años en Caracas trabajando como zapatero en su casa. El día de su arresto, el 2 de septiembre, fue bajado de un autobús por oficiales de la

Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB en el barrio de Petare. Fue detenido por no contar con una cédula de identidad certificada en Venezuela.



[La mayoría de los prisioneros son jóvenes, muchos vivían en Petare y fueron capturados cuando salían de sus sitios de trabajo.](#)



[A Doiler Yépez, de 33 años de edad y oriundo de Barranquilla, lo arrestaron en principio porque no tenía sus documentos de identidad. Tenía 12 años en Venezuela, vivía en el barrio caraqueño San Blas de Petare y trabajaba como constructor. “Como todos, vinimos cuando Chávez era presidente y tenía ideología de hacer patria. Mis hijos, familia, todos se fueron a Colombia después de ser detenido”, explica.](#)

Los hermanos Ever y Deivis Julio –procedentes de Sincelejo– recuerdan que salían de una venta de plátanos en Petare cuando fueron detenidos por la PNB. “Les entregamos documentos colombianos y pasaportes fronterizos, pero nos llevaron a la comisaría y dijeron que sería un chequeo de rutina. Después nos comunicaron que seríamos deportados y finalmente nos mantienen arrestados sin haber cometido algún crimen”, relata Ever.

Para amasar una cantidad notable de “paramilitares” las autoridades venezolanas reclutaron colombianos de cualquier rincón posible. José Moreno e Israel Cáceres, de 60 y 45 años de edad, respectivamente, estaban a punto de ser liberados de las cárceles donde cumplían condenas por otros delitos cuando fueron llevados al SAIME (Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería) para efectuar trámites legales antes de salir a la calle. Pero en vez de ser liberados fueron trasladados junto al resto de sus conciudadanos para ser señalados de conspiradores. “Yo había entrado a la cárcel de Sabaneta en Maracaibo (estado Zulia) por homicidio en 2009 y luego fui trasladado a Barquisimeto (estado Lara). El 5 de septiembre sería puesto en libertad, pero volví a caer

en otra celda y con otra acusación”, dice Moreno.



[Los prisioneros admiten que no son tratados como reclusos comunes. Muchos se consideran secuestrados.](#)



[Un antiguo galpón de la Policía fue habilitado como celda para los 59 colombianos detenidos por órdenes de Nicolás Maduro.](#)



Los 59 detenidos que conviven en el galpón de la Policía Nacional Bolivariana de La Yaguara han colgado sábanas, trapos y bolsas plásticas de sus camas para tratar de establecer un espacio individual. La cárcel es un lugar sin intimidad.



Los hombres han creado sus propios regímenes de convivencia, como si se tratara de una comuna. Unos limpian, otros arreglan sus zapatos o remedan su ropa. La celda se ha transformado en un verdadero campamento donde transcurren los días de encierro.

Cáceres, nacido en Santander, había llegado a Guarenas, en el estado Miranda, hace 22 años para dedicarse a la agricultura. Fue arrestado por deforestación ambiental. Por el delito había pasado una década en cinco cárceles de Venezuela: Rodeo I, Rodeo II, Yare II, Urbana y El Dorado. El 5 de septiembre de 2016 iba a ser trasladado por la policía para su país, pero su rumbo cambió y fue acusado de conspirador.

Las historias se repiten hasta completar los 92 colombianos que de un día para otro pasaron de ser indocumentados a ser los “desestabilizadores” de turno de la “revolución bolivariana”.

En el sinsentido de su prisión muchos se han quedado solos. La mayoría de sus familias regresaron a Colombia empujadas por la crisis económica de Venezuela y los parientes que todavía siguen en el país dicen estar preocupados por las condiciones de vida de sus familiares presos. Luis Alberto, padre de tres hijos, no ha podido cumplir su tratamiento médico en la cárcel. “Mi casa quedó abandonada. Toda mi familia se fue a Colombia. Yo estoy padeciendo con mi enfermedad. No hay nadie que nos defienda. Somos personas de a pie. Me capturaron haciendo mi trabajo de mecánico”, recuerda.



Muchos parientes de los colombianos detenidos en Caracas han regresado a Colombia por la crisis económica y que han quedado sin sus principales sustentos. Los familiares que siguen en Venezuela suelen visitarlos en la prisión mientras esperan que se ejecute la orden de libertad emitida desde el 21 de noviembre de 2017.



[Botellas con agua, comida y otros suministros son almacenados por los prisioneros. El racionamiento es una práctica común en la cárcel, donde la escasez es una constante.](#)



Ollas y envases vacíos. Pocas veces los prisioneros pueden cocinar. La crisis económica ha penetrado en el sitio de reclusión. Una sola comida al día es suministrada por agentes policiales. Los sábados reciben una ración doble de alimentos porque el domingo no trabajan los cocineros. Algunos, como Juan Carlos Arellano, un costeño de 36 años, da sus alimentos a su esposa y dos hijos. “Yo era cabeza de familia, ahora nadie nos ayuda. Yo puedo tener hambre, pero no quiero que ellos se vayan sin nada en el estómago”, dice.



Algunos, como Luis Alberto (camisa negra, a la izquierda), necesita tratamiento médico por una lesión en sus intestinos provocado por un disparo de bala en 2012. “No puedo ir al baño como los demás, necesito cuidados especiales, necesito una operación. Me siento mal, deprimido y debilitado físicamente. Quisiera una ayuda humanitaria”, dice.



[Los sanitarios se han inundado varias veces porque esta área no estaba habilitada para recibir a presos comunes.](#)



[El deterioro del reclusorio donde están los colombianos ha provocado enfermedades en muchos de ellos.](#)



[El deterioro del reclusorio donde están los colombianos ha provocado enfermedades en muchos de ellos.](#)

En el reclusorio todos refieren la historia de José de los Santos Belmonte, uno de los colombianos encarcelados que, según versiones de sus compañeros, murió en la cárcel de Táchira producto de que un insecto entró en su oído. Ninguno ha sido exonerado fácilmente de la pena, pese a que tienen orden de liberación. Los que han salido del cautiverio es por fuga, en su mayoría, quedando los 59 que hoy siguen tras las rejas.

Por su liberación ha pedido el gobierno de Juan Manuel Santos, con más fuerza en los últimos meses. El 11 de febrero de este año la Cancillería colombiana informó en un comunicado que en 24 reuniones bilaterales conversó sobre el asunto con las autoridades venezolanas, además de enviar 40 notas oficiales para exigir la libertad del grupo. Este mensaje ocurre después de que José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), criticara al Gobierno de Colombia por no haber actuado enérgicamente desde septiembre de 2016 para exigir la repatriación de estas personas. “Lamentamos profundamente que, a pesar de la gravedad de la situación, no parece haber priorizado adoptar medidas para lograr la liberación de sus connacionales”, reza una carta del organismo internacional.



[La administración de Juan Manuel Santos ha pedido la liberación de los 59 detenidos. El 11 de febrero de 2018, la Cancillería colombiana informó en un comunicado que en 24 reuniones bilaterales conversó sobre el asunto con autoridades venezolanas, mientras que envió 40 notas oficiales para exigir la libertad del grupo.](#)



[Los detenidos opinan que su caso se ha olvidado. Explican que tienen un perfil que los convierte en presas fáciles del limbo jurídico: indocumentados, pobres, sin estudios universitarios y de piel morena.](#)

Muchos de los prisioneros indican que el verdadero motivo de su cautiverio es no dejar en evidencia que Maduro cometió un error al detenerlos, que lo suyo fue “un falso positivo” y que, más allá de la decisión de los tribunales, dependen de una orden presidencial para volver a ser libres. “El oficial (Alfredo Pérez) Ampueda (jefe de la PNB) no ha podido soltarnos porque no se ha autorizado desde Miraflores”, asevera uno de los reclusos.



Aislados y sin trabajo asignado, el ocio es lo que manda. Los colombianos pasan las horas viendo televisión, uno de los pasatiempos permitidos en el galpón donde se hallan desde 2016.

**Fecha de creación**

2018/03/25